



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, siete (7) de octubre de dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO CONEXO – INCIDENTE DE NULIDAD
ASUNTO: APELACIÓN AUTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
EJECUTANTE: HANS ADRIÁN ESPINOSA VERA
EJECUTADOS: ROMÁN DE JESÚS GÓMEZ MEJÍA y OTROS.
RADICADO: 050013105013 2019-00554 01
ACTA: 74

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA** procede pronunciarse en virtud del recurso de apelación interpuesto por los incidentistas **ROMÁN DE JESÚS GÓMEZ MEJÍA y DAYRON DE JESÚS GÓMEZ** frente a la decisión con la cual el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín no decretó una prueba.

A continuación, la Sala previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 74** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, doctora Ana María Zapata Pérez, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

En este proceso ejecutivo en el que se libró mandamiento de pago por concepto de honorarios profesionales con auto del **25 de octubre de 2019**¹ modificado por esta Sala con providencia del **12 de febrero de 2020**², el ejecutante mediante correos del 3 de mayo³ y del 9 de junio de 2021⁴ informó al Despacho sobre la devolución de la guía de correos por la inexistencia de la dirección, por lo que se procedió al emplazamiento bajo los parámetros

¹ Páginas 93 a 98 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia; folios 62 a 65.

² Páginas 105 a 110 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia; folios 71 a 73.

³ PDF 07 de la carpeta de primera instancia.

⁴ PDF 10 de la carpeta de primera instancia.

del Decreto 806 de 2020⁵, se efectuó el nombramiento de curadora Ad-litem⁶, se emitió edicto emplazatorio⁷, la curadora *ad litem* presentó contestación⁸ fijándose así fecha para la audiencia pública⁹.

Pero posteriormente intervinieron en el proceso **MANUELA GOMEZ ESTRADA y ROMAN, DAYRON y ROBINSON GÓMEZ MEJÍA**¹⁰ quienes a través de apoderado propusieron incidente solicitando la **NULIDAD POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN** y varias pruebas, entre ellas la declaración de parte de los señores DAYRON y ROMAN.

El pasado **15 de septiembre de 2022**¹¹ la Juez se abstuvo de decretar la **declaración de parte** de los señores DAYRON y ROMAN GÓMEZ MEJÍA. Para tomar esta determinación efectuó un análisis sobre la valoración de la simple declaración de parte a la luz de la jurisprudencia citando la sentencia SC del 10 de marzo de 2020 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de justicia. Señala que esta prueba sólo resulta idónea para provocar la confesión de hechos adversos estando legitimada la contra parte para solicitarla más no la parte, pues no se puede constituir como plena prueba a favor de quien la alega. Concluyó así que el medio de prueba es inconducente y destacó que en oportunidades anteriores el Tribunal Superior de Medellín ha apoyado sus decisiones en ese sentido¹² a partir de la tesis del Dr. RAMIRO BEJARANO¹³, limitando la oportunidad para que la parte sea escuchada a la intervención en la demanda y contestación.

Inconforme con esta decisión, el apoderado de los incidentistas interpuso **recurso de apelación** solicitando su revocatoria para que se decrete la declaración de parte con los siguientes argumentos: i) Invoca providencia del 18 de febrero de 2020 de una Sala de

⁵ Con auto del 8 de julio de 2021; PDF 11 de la carpeta de primera instancia.

⁶ La curadora *ad litem* aceptó el nombramiento como se desprende de comunicación del 21 de julio de 2021 (PDF 14) y fue posesionada el 27 de julio de 2021 y se e descorrió traslado para proponer excepciones por el término de 10 días (PDF 15).

⁷ PDF 16 de la carpeta de primera instancia.

⁸ PDF 18 de la carpeta de primera instancia; data del 3 de agosto de 2021.

⁹ PDF 20 de la carpeta de primera instancia; auto del 2 de diciembre de 2021. La audiencia se fijó para el 16 de junio de 2022.

¹⁰ PDF 27 de la carpeta de primera instancia. Si bien en el encabezado del texto del incidente se mencionó además al señor ROBINSON DE JESUS GOMEZ MEJÍA y la señora MANUELA GOMEZ ESTRADA, de ellos no reposa poder conferido al abogado CARLOS HERNANDO ESPINOSA MADRID, como sí lo acredita ROMAN DE JESÚS GÓMEZ MEJÍA en correo del 16 de junio de 2022 (Páginas 2 y 3 del PDF 27) y DAYRON DE JESÚS GÓMEZ MEJÍA en correo de la misma fecha (PDF 28).

PDF 31 de la carpeta de primera instancia; a partir de la página 8.

¹¹ PDF 43 de la carpeta de primera instancia. 15 de septiembre de 2022.

¹² Cita auto del 15 de diciembre de 2021 de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, proferido en proceso 05001310501320180051001.

¹³ Cita texto "La parte no puede pedir su propia declaración".

Decisión Civil de este Tribunal en la que se decretó como prueba la declaración de parte¹⁴ teniendo en cuenta que se trata de una nueva posibilidad consagrada en el CGP como garantía para que las partes se defiendan y hagan uso de la libertad probatoria concedida por la Ley, acorde con los pactos internacionales y la convención de derechos humanos sobre el derecho a ser oído públicamente. ii) Cita la sentencia C-496 de 2015 sobre la diferencia del decreto y la valoración de las pruebas del artículo 191 del CGP, para concluir que, si bien la jurisprudencia no ha sido pacífica sobre el tema, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional se han decantado por permitir que la parte ofrezca su testimonio como sujeto procesal.

2. TRÁMITE EN ESTA INSTANCIA

Con auto del 27 de septiembre de 2002 se admitió el recurso de apelación y se corrió traslado a las partes para que intervinieran. La parte incidentista presentó alegatos¹⁵ solicitando que se revoque la decisión de primera instancia para en su lugar ordenar que se decrete la prueba de declaración de parte solicitada. Para lo anterior argumentó: **i)** La juez negó el derecho que le asiste a la parte demandada a rendir su propia versión de los hechos, cuando por el contrario debe estimar que tal medio probatorio debe valorarse como un relato de las circunstancias atinentes al problema que se busca resolver dentro de la Litis. Es decir, como un testimonio más que por ser un relato de la parte, el juez deberá analizarlo estrictamente y contrastarlo con los demás medios de prueba a fin de poder decidir en concreto. **ii)** Olvidó la juez que tan importante es el interrogatorio de parte como la declaración de parte, cuando se pretende obtener el raciocinio acertado sobre el contenido de la verdad en torno a las versiones que se someten a su escrutinio. **iii)** El juez opera en este caso como el imparcial encargado de valorar las versiones y, por ello entonces, jamás podrá afirmarse que quien rinde una declaración de parte solo habla a su favor y trata de inclinar a su lado la balanza probatoria. Es de la versión que el juez puede extractar con su raciocinio lógico, con su imparcialidad y valoración total de las pruebas los sustratos de verdad que han de fundamentar un veredicto acertado de lo planteado en la Litis. **iv)** Cita como precedente sentencia STC9197 – 2022 y finalmente indica que en este caso concreto se solicitó la declaración de parte, ante la orfandad de pruebas testimoniales, ya que el asunto a probar, invocado en la causal de nulidad, lo conocen mejor y con suficiencia las personas que hoy resultan afectadas con el tergiversado enfoque que pretende dar el ejecutante.

¹⁴ Proferida en proceso 05001310300420190023201 y dentro de esta providencia hace énfasis en CSJ SL del 18 de septiembre de 2013 en radicado 2005 00211 y CSJ SL radicado 11504 del 28 de agosto de 2015.

¹⁵ Pdf 04AlegatosIncidentista de la carpeta 02SegundaInstancia

Pues bien, la competencia de la Sala está dada por las materias del recurso de apelación, por lo que el **problema jurídico** a resolver se contrae a determinar si resulta procedente decretar como prueba la DECLARACION DE PARTE de los señores DAYRON y ROMAN GÓMEZ MEJÍA en virtud de la solicitud efectuada por su apoderado al momento de instaurar incidente nulidad por indebida notificación

3. SÍ RESULTA PROCEDENTE EL DECRETO DE LA DECLARACION DE PARTE

De acuerdo con los ANTECEDENTES de esta providencia la juez se abstuvo de decretar la DECLARACIÓN DE PARTE de los señores DAYRON y ROMAN DE JESUS GOMEZ MEJÍA, solicitada en el incidente de nulidad propuesto por estos mismos ejecutados, argumentando que es un medio inconducente citando sentencia CSJ SC 780 del 10 de marzo de 2020 y auto del 15 de diciembre del Tribunal Superior de Medellín proferido en el proceso con Radicado 05001310501320180051001.

Y es contra esta decisión y análisis que el recurrente solicita se acceda a decretar la prueba, apoyándose principalmente una decisión del 18 de febrero de 2020 de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín en el proceso con Radicado 05001310300420190023201.

En criterio de esta Corporación la decisión deberá ser revocada para ordenar el decreto de la prueba solicitada, pues los ejecutados sí se encuentran legitimados para solicitar su propia declaración, intervención que materializa el derecho de ser oídos en el proceso judicial; siendo conducente en razón de su idoneidad para la demostración de la tesis de los incidentistas según la cual, el ejecutante no realizó esfuerzos adecuados para la notificación, situación que donde llegue a demostrarse, derivaría en una vulneración al debido proceso y el derecho de defensa.

Debe señalarse que la **simple declaración de parte** y la **confesión** son conceptos que han sido explicados por la Doctrina a través de una relación género-especie, donde la declaración de parte es el género y la confesión es la especie¹⁶; en este sentido, la primera de ellas hace referencia a todas las manifestaciones que hace la parte, mientras que la

¹⁶ Hernando Devis Echandía, en "Teoría General de la Prueba Judicial" capítulo "Declaración de parte y prueba de confesión", página 563 y siguientes; obtenido de https://www.corteidh.or.cr/tablas/13421_ti.pdf

segunda es la declaración de la parte que versa sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o favorezcan a la parte contraria.

Inicialmente, el Código de Procedimiento Civil (CPC)¹⁷ reguló el régimen probatorio y dispuso expresamente 7 medios de prueba¹⁸, entre ellos la que denominó **declaración de parte** que se restringía a la confesión –artículo 194 y siguientes- provocada a través del interrogatorio de parte al que era citado por la contraparte –artículo 202 en adelante- Se advierte entonces, que el medio probatorio al que se hacía referencia en el anterior procesal era estrictamente a la confesión, no se preveía la posibilidad de que la parte, por cuenta propia, rindiera su declaración de manera voluntaria, interrogado por su propio abogado ante el juez.

Sin embargo, con la expedición del Código General del Proceso¹⁹, en que la normativa procesal de nuestro país migró de un sistema predominantemente escrito a uno oral generando entre otros el acercamiento entre juez y las partes el legislador dispuso 9 medios de prueba, dentro de los que se encuentra **la declaración de parte y la confesión**²⁰, señalándose estos dos de manera independiente. Así, se denominó el capítulo III de la Sección tercera de las pruebas como “DECLARACIÓN DE PARTE Y CONFESIÓN”. Y partiendo de la existencia de estos dos medios de prueba es que deben interpretarse los artículos 191 y siguientes del Código: i) En el **artículo 191** se establecen los requisitos para que la declaración de parte sea tenida como confesión atendiendo a las características especiales de este medio probatorio, y en su inciso final dispone que “*La simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas*”; disposición última que no se contemplaba en el CPC. ii) Luego, el **artículo 196** indica que la confesión debe analizarse de manera conjunta, dado que es indivisible; y que por su parte la declaración que verse sobre hechos diferentes a los confesados, debe apreciarse separadamente. iii) Y en el **198** se estipula que el interrogatorio de parte puede ordenarse por el juez de oficio o a solicitud de parte, y no se restringe a que la solicite la contraparte como sucedía en el CPC²¹.

¹⁷ Decreto 1400 de 1970.

¹⁸ **ARTÍCULO 175. MEDIOS DE PRUEBA.** Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.

¹⁹ Ley 1564 de 2012.

²⁰ **ARTÍCULO 165. MEDIOS DE PRUEBA.** Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. / El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales.

²¹ **ARTÍCULO 203. INTERROGATORIO A INSTANCIA DE PARTE.** Dentro de la oportunidad para solicitar pruebas en la primera instancia, cualquiera de las partes podrá pedir la citación de la contraria, a

El anterior entendimiento ha sido ampliamente discutido por la doctrina en los últimos años y a pesar de encontrar posiciones opuestas muy sólidas²², un sector importante defiende la existencia de los dos medios probatorios argumentando básicamente²³: **i)** El derecho a ser oído por el juez, que proviene de instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos humanos²⁴, el Pacto Internacional de los derechos Civiles y Políticos²⁵ y la Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto San José²⁶. **ii)** El derecho a la defensa como garantía del debido proceso contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política²⁷, que se concreta en el derecho de ser escuchado. **iii)** Que tratándose de un sistema judicial predominantemente oral, el derecho a ser oído no puede materializarse en piezas escritas, pues debe tenerse en cuenta el principio de inmediación que rige las audiencias públicas orales. En este sentido, es perfectamente viable que las partes al asistir a audiencias públicas, rindan sus versiones ante el juez, a pesar de que la parte contraria no lo solicite o lo solicite buscando obtener la confesión²⁸. Al respecto, Ulises Canosa ha destacado:

El nuevo sistema oral supone intensificar en alto grado el contacto entre los sujetos del proceso, también en los aspectos probatorios, desarrollando nuevos mecanismos de averiguación de la verdad. En el sistema esencialmente escrito del CPC el saber de las partes era un instituto aprovechado limitadamente mediante el interrogatorio de la contraparte para provocar la confesión. Ahora ese dicho o saber de las partes incrementa en el CGP su utilidad para la formación del convencimiento del juez,

fin de interrogarla sobre hechos relacionados con el proceso. En la segunda instancia el interrogatorio sólo podrá pedirse en los casos señalados en el artículo [361](#) [...].

²² Como la tesis del Dr. Ramiro Bejarano Guzmán, según la cual, el CGP no autorizó a la parte a pedir su propia declaración en el proceso; véase columna “La parte no puede pedir su propia declaración”, Ámbito Jurídico – 11 de octubre de 2017.

²³ Para las siguientes consideraciones se hizo uso de “Cuestiones y opiniones – acercamiento práctico al Código General del Proceso”, de autoría del Dr. Marco Antonio Álvarez Gómez y el “Plan de Formación de la Rama Judicial” de autoría del Dr. Ulises Canosa Suarez. Obtenidos de: <https://www.ramajudicial.gov.co/documents/1545778/6575727/INVEST+CGP+CUESTIONES+Y+OPINIONES+DEF.pdf/320427a7-6ffa-4377-9c25-70853e09b58b> y https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/sites/default/files/modulo_pruebas_cgp.pdf

²⁴ **Artículo 10.** Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

²⁵ **Artículo 14.** Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. [...]

²⁶ **Artículo 8.** Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. [...]

²⁷ **Artículo 29.** El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

²⁸ Marco Antonio Álvarez Gómez en “Cuestiones y opiniones – acercamiento práctico al Código General del Proceso”.

porque podrá usarse como fuente de prueba aunque no sea perjudicial para el declarante, esto es, así beneficie a la propia parte.

iv) Que es el juez quien valora las pruebas bajo los parámetros de la sana crítica y la buena fe del artículo 83 de la Constitución Política, siendo así el operador jurídico quien al momento de dictar sentencia otorgue valor probatorio a la declaración de parte, y teniendo en cuenta el material probatorio restante podrá darle credibilidad. v) Finalmente, se argumenta que la declaración a iniciativa de la propia parte debe ceñirse a las reglas de la prueba testimonial, pues no se trata de interrogatorio de parte el cual tiene reglas especiales.

Frente a esta discusión, la Corte Suprema de Justicia ha admitido la existencia de los **dos medios probatorios**, valiéndose de argumentos como los anteriormente expuestos: En primer término, diferenciando la simple declaración de parte y la confesión al tenor literal de las normas del CGP:

Sobre esas diferencias, el artículo 165 del Código General del Proceso prevé que «son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento (...), los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez».

Por su parte, el canon 191 del mismo estatuto, luego de mencionar que la confesión requiere, entre otros aspectos, que i) “el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado”, y ii) que “verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria”, establece que “la simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas”.

A renglón seguido el artículo 196 dispone que “[l]a confesión deberá aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho confesado, excepto cuando exista prueba que las desvirtúe. Cuando la declaración de parte comprenda hechos distintos que no guarden íntima conexión con el confesado, aquellos se apreciarán separadamente.

Significa, entonces, que las partes pueden rendir su versión sobre los hechos materia de la controversia, algunas veces se tratará de una simple declaración y, en otras ocasiones, de una confesión, lo que, en todo caso, definirá el juez al momento de valorar el relato del interesado, asignándole el mérito correspondiente.²⁹

(Negrita propia)

En segundo término, porque el régimen probatorio en nuestro país se funda en la apreciación razonada de la prueba, debiendo el juez ponderar la evidencia y sopesarla según las reglas de la experiencia, la lógica y la sana crítica; pudiendo así el juez valorar las manifestaciones de la parte para cotejarlas con el resto de acervo probatorio y construir la convicción necesaria para el silogismo judicial. Al respecto:

²⁹ STC 13366 de 2021.

Quién mejor que la propia parte, que es la más interesada en las resultas del pleito, para narrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos cuya averiguación es pieza clave para su resolución. A fin de cuentas, es ella quien los conoció mejor que nadie y, por ende, está en mejores condiciones de rememorarlos, sobre todo porque es la protagonista en la controversia, lo que hace que su versión sirva para aclarar lo ocurrido si de ella se logran extraer los frutos debidos.³⁰

Y si bien advierte la Alta Corporación que la parte tiene intereses en las resultas del juicio, ello no es óbice para que el juez **atienda la declaración, la aprecie en su contexto según las máximas de la experiencia, las reglas de la sana crítica y en armonía con los demás medios probatorios**³¹, buscando en todo caso valorar objetivamente su credibilidad. Si el relato brindado por la parte resulta coherente, contextualizado y puede ser corroborado en el proceso con documentos u otros medios de prueba, es digno de credibilidad y puede servir para esclarecer los hechos objeto de debate. Así:

En tal caso, debe el juez ser mucho más analítico y prescindir de cualquier valoración subjetiva respecto del declarante, como por ejemplo sus reacciones, la firmeza de la voz, su vestimenta, su seguridad, etc., para darle paso a una apreciación más metódica y reflexiva en la que le preste mayor atención al contexto y al contenido de la reconstrucción factual hecha por la parte, así como a la coincidencia de su narración con otros medios para saber si es verosímil.³²

Sobre el particular, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha hecho énfasis en que estas declaraciones deben analizarse bajo el postulado de que ninguna de las partes puede crear su propia prueba y advirtió:

Lo anterior, sin que se desconozca que el **artículo 191 de CGP**, tiene a la declaración de parte como un medio de convicción válido para soportar la sentencia, pero imponiendo al Juez el deber de valorarla de acuerdo a las reglas generales de apreciación de la prueba, esto es, de manera sistemática, lógica y razonable con las demás.³³

Finalmente, analizando la normatividad que soporta esta figura, la Sala de Casación Civil ha expresado:

Es tan relevante, pertinente y necesaria la declaración de la parte en el proceso jurisdiccional, que el Código General del Proceso, expedido en coherencia con los postulados y principios que sirven de faro al Estado Constitucional y Social de Derecho, democrático, participativo y pluralista implementado en la Carta Política de 1991, la positivizó, y lo hizo cuando autorizó a cada litigante para brindar al proceso su versión de los hechos y previno al juez para que la valore en comunión con las demás pruebas.

Nótese cómo en el artículo 165, referido a los medios de prueba, distinguió entre declaración de parte y confesión, lo que reafirmó en el artículo 198 cuando estableció que «el juez podrá, de oficio o a solicitud de parte, ordenar la citación de las partes a fin de interrogarlas sobre los hechos relacionados con el proceso» y reiteró al final de ese precepto al consagrar que «la simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo a las reglas generales de apreciación de las pruebas».

³⁰ STC 9197 de 2022.

³¹ STC 13366 de 2021. Luego, sobre la forma de valorar la confesión, la Corte se remite a los requisitos plasmados en el artículo 191 del CGP.

³² STC 9197 de 2022.

³³ SL 4291 de 2020.

Con ello **no sólo desterró la restricción impuesta por el derecho romano y medieval, sino que le dio carta de naturaleza propia a la declaración de parte y primacía al derecho superlativo que tiene toda persona a ser oída por el funcionario que la va a juzgar**, sin necesidad de que el juez o su contraparte la llamen a interrogatorio, sino por su propia iniciativa, lo que concuerda con el artículo 29 de la Constitución Política que consagra el debido proceso dentro del cual se halla ínsito el derecho de defensa y contradicción, así como la garantía que tiene todo justiciable para ser escuchado y que está prevista en el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos [...]

Por consiguiente, en el caso objeto de control constitucional el fallador debió apreciar libremente la exposición factual de los demandados y valorarla acorde con las pautas trazadas en el estatuto procesal, a fin de cotejar su contenido con los demás elementos de prueba obrantes en el infolio y extraer, de ese escrutinio, el mayor convencimiento posible y útil para zanjar la pendencia. Como no lo hizo, incurrió en un defecto fáctico que habrá que remediar.³⁴

Finalmente, en relación con la sentencia citada en la providencia para denegar la prueba (SC 780 de 2020) se advierte que, si bien se explica que la interpretación del artículo 191 del CGP se refiere al interrogatorio que puede hacer el juez para fijar el objeto del litigio esto se da en un contexto referido a los posibles errores en los que puede incurrir el operador judicial al momento de la limitación de los extremos del litigio que dan lugar a la fijación del objeto de la Litis ; Pero lo cierto es que en esta providencia no se aborda la declaración de parte como medio probatorio aunque de hecho se reconoce que su utilidad para contextualizar el caso³⁵.

Y ya verificados los planteamientos que se esbozan en el incidente la prueba solicitada resulta conducente, mal puede imponerse a la parte que se defienda exclusivamente por escrito como se aduce en la providencia, pues con ello se desnaturaliza la oralidad propia de nuestro procedimiento que implica que las pruebas se permeen por el postulado de la inmediación, pudiendo la parte dar su versión de los hechos a través de la simple declaración. Así, dadas las particularidades del caso, mal puede privarse a los ejecutados de dar su versión del asunto así la parte ejecutante no los haya llamado a interrogatorio.

Es en estos términos que deberá REVOCARSE la decisión que se revisa, para en su lugar ORDENAR que se decrete la declaración de parte de los ejecutados e incidentistas DAYRON DE JESUS y ROMÁN DE JESÚS GOMEZ MEJÍA.

³⁴ STC 9197 de 2022.

³⁵ *Como la simple declaración que no comporta confesión no produce prueba a favor ni en contra del declarante o de su contraparte, hay que concluir necesariamente que no es un medio probatorio sino un hecho operativo, dado que no genera controversia, ni hay necesidad de someterla a contradicción; por lo que sólo servirá para contextualizar la situación cuando hayan de elaborarse los enunciados fácticos en la sentencia. (Negrita propia).*

Al salir adelante el recurso de apelación, no se causan costas de conformidad con lo preceptuado en el numeral 1º del Art. 365 del C.G.P.

4. DECISIÓN

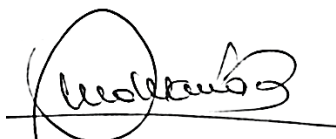
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Sexta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
DECIDE:

PRIMERO: REVOCAR la decisión del **15 de septiembre de 2022** para en su lugar ORDENAR que se decrete la declaración de parte de los ejecutados e incidentistas DAYRON DE JESUS y ROMÁN DE JESÚS GOMEZ MEJÍA.

SEGUNDO: Sin costas.

Lo anterior se notifica por ESTADOS. Se da por terminada la audiencia y se firma en constancia por los que en ella intervinieron.

Los Magistrados,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N
º 182 del 10 de octubre de 2022

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>



RADICADO: 050013105013 2019-00554 01

AUTO del // 07/10/2022

Con este código puede acceder a la actuación de segunda instancia, **para ello debe tener una cuenta de Microsoft.**

Enlace en caso de no tener lector QR: